

«RIT»

Foja: 1

FOJA: 22 .- .-

NOMENCLATURA	: 1. [40]Sentencia
JUZGADO	: 16° Juzgado Civil de Santiago
CAUSA ROL	: C-7652-2022
CARATULADO	: FLORES/FISCO DE CHILE - C.D.E

Santiago, veintiocho de Abril de dos mil veintitrés.

Vistos:

Que, con fecha 29 de julio de dos mil veintidós, comparece don Luis Pérez Camousseight, abogado, domiciliado en calle Doctor Sótero del Río N° 326, oficina N° 707, comuna de Santiago, en representación de don Juan Carlos Flores Sánchez, electromecánico, domiciliado en calle Maipú, N° 1159, cerro La Cruz, comuna de Quintero, quien deduce acción de indemnización de perjuicios en contra el Fisco de Chile, representado legalmente por don Juan Antonio Peribonio Poduje, abogado, domiciliado en calle Agustinas N° 1225, piso N° 4, comuna de Santiago.

Que, con fecha 12 de octubre de dos mil veintidós, comparece el apoderado del demandado, quien contesta la demanda solicitando su rechazo.

Que, con fecha 19 de octubre de dos mil veintidós, la demandante evacua el trámite de réplica.

Que, con fecha 25 de octubre de dos mil veintidós, la demandada evacua el trámite de dúplica.

Que, con fecha 14 de noviembre de dos mil veintidós, se recibe la causa a prueba.

Que, con fecha 17 de abril de dos mil veintitrés, se cita a las partes a oír sentencia.

Considerando:



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: CVRHXFDNKXX

«RIT»

Foja: 1

Primero: Que, comparece don Luis Pérez Camousseight en representación de don Juan Carlos Flores Sánchez quien deduce acción de indemnización de perjuicios en contra el Fisco de Chile, ya individualizados.

Funda su pretensión en el hecho que su representado figura en el registro de la Comisión de Prisión Política y Tortura Valech I bajo el número 8744.

A época del golpe militar, don Juan Carlos Flores era simpatizante de izquierda y se encontraba realizando el servicio militar, en el aeropuerto de Pudahuel, siendo menor de edad. Allí, fue detenido de manera ilegal mientras realizada guardia con fecha 17 de enero de mil novecientos setenta y cuatro por efectivos de las Fuerzas Armadas y del Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea.

Fue trasladado a las dependencias de la Academia de Guerra Aérea, donde quedó incomunicado y fue torturado por sus captores por medio de golpes y corrientes eléctricas por aproximadamente un mes.

Luego, fue trasladado a la Escuela de Especialidades de la FACH por dos días, para luego ir a la Academia Politécnica Aeronáutica, donde estaría por otro mes.

Posterior a ello, fue trasladado al Regimiento de Colina, en donde fue detenido por cuatro meses, siendo encerrado en celdas donde no llegaba la luz del sol, para luego volver a la Academia de Guerra Aérea, donde obtiene su libertad, el día 5 de julio de mil novecientos setenta y cuatro.

En todos los sectores en donde se vio privada su libertad, fue torturado por medio de golpes y aplicación de corriente eléctrica, además de diversos interrogatorios. Dichos apremios, han llevado a que en la actualidad sufra de trastornos de sueño, depresión, claustrofobia, estrés post traumático y un miedo a la fuerza uniformada.

Así las cosas, resulta evidente el daño que se le ha producido a su representado en diversos aspectos de su vida y que ha sido generado por el propio estado de Chile, llegando a reconocerlo en diversos informes, como el de la Comisión Nacional de Prisión Política y Tortura.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: CVRHXFDNKXX

«RIT»

Foja: 1

Por ello, señala que dicho daño se avalúa en la suma de \$200.000.000 de pesos, el cual deberá ser pagado y reajustado de conformidad al IPC, en conjunto con los intereses legales desde la fecha de notificación.

Respecto al apartado de derecho, comenta que el Estado de Chile ha reconocido su responsabilidad en estos hechos, por lo que se encuentra obligado a responder por los perjuicios generados, toda vez que los mismos constituyen a violaciones a los derechos humanos consagrados en favor de su representado.

Cabe decir que el establecimiento de responsabilidad del estado queda fijada tanto a nivel constitucional –en todas las diversas cartas magnas es posible encontrar este principio consagrado – así como a nivel internacional, en los diversos pactos suscritos, firmados y ratificados por el Estado de Chile.

Previas citas legales, solicita tener por deducida acción de indemnización de perjuicios en contra el Fisco de Chile, ya individualizado, y en definitiva, se condene a la indemnización por concepto de daño moral por la suma de \$200.000.000 pesos, más reajustes, e intereses y con expresa condena en costas.

Segundo: Que, comparece la abogada Ruth Israel López, en representación del Fisco de Chile, al contestar la demanda principal, solicita el rechazo de dicha acción en base a las excepciones, defensas y alegaciones que expone a continuación.

Opone en primer lugar la excepción de reparación integral, por haber sido ya indemnizado el demandante.

Reparaciones mediante transferencia directa de dinero y pensiones.

En tal sentido manifiesta que las indemnizaciones que el demandante solicita se desenvuelven en el marco de las infracciones a los Derechos Humanos, cuya comprensión se da en el ámbito de la Justicia Transicional, tanto en el derecho interno como en el derecho internacional. En efecto, la Ley Nro. 19.123 constituyó un esfuerzo trascendental de reparación, pues



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: CVRHXFDNKXX

«RIT»

Foja: 1

hizo posible atender a la necesidad de reparar económicamente a las víctimas de violaciones a los derechos humanos, mediante reparaciones mediante transferencias directas de dinero, mediante la asignación de derechos sobre prestaciones estatales específicas; y reparaciones simbólicas, lo que permite que numerosas víctimas obtengan una reparación monetaria. Esta forma de pago ha significado un monto en indemnizaciones dignas, que han permitido satisfacer económicamente el daño moral sufrido por muchos, haciéndose referencia en la discusión de dicha ley incluso al objeto indemnizatorio de reparación moral y patrimonial de aquella.

Hace presente que a diciembre de 2015, el Fisco había desembolsado la suma total de \$706.387.596.727.-, por concepto de reparaciones de daño moral ocasionado a víctimas de violaciones a los Derechos Humanos.

Agrega que estas pensiones han sido una buena manera de concretar las medidas que la justicia transicional exige en estos casos, además de la indicada pensión, la Ley 19.123 consagra además transferencias directas de dinero que se han creado con idénticos fines reparatorios.

Reparaciones específicas.

Expresa que el demandante ha recibido beneficios pecuniarios al amparo de las leyes números 19.234 y 19.992 y sus modificaciones.

Indica en primer término que la ley 19.992 (y sus modificaciones) estableció una pensión anual de reparación y otorgó otros beneficios a favor de las personas afectadas por violaciones de derechos humanos, todos individualizados en el anexo “Listado de prisioneros políticos y torturados” de la Nómina de personas Reconocidas como Víctimas. Agrega que así, se estableció para quienes figuraran en dicha nómina una pensión anual reajutable de \$1.353.798 para beneficiarios menores de 70 años; de \$1.480.284 para beneficiarios de 70 o más años de edad y de \$ 1.549.422, para beneficiarios mayores de 75 años de edad.

Consigna adicionalmente, se concedió a los beneficiarios el derecho a gratuidad en las prestaciones médicas otorgadas por el Programa de Reparación y Atención Integral de Salud (PRAIS) en Servicios de Salud del



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: CVRHXFDNKXX

«RIT»

Foja: 1

país. Para acceder a estos servicios la persona debe concurrir al hospital o consultorio de salud correspondiente a su domicilio e inscribirse en la correspondiente oficina del PRAIS. Precisa que el PRAIS cuenta con un equipo compuesto en su mayoría por profesionales médicos psiquiatras, generales, de familia, psicólogos y asistentes sociales, encargados de evaluar la magnitud del daño y diseñar un plan de intervención integral, a fin de dar respuesta al requerimiento de salud de los beneficiarios.

Menciona que también se incluyeron beneficios educacionales consistentes en la continuidad gratuita de estudios básicos, medios o superiores, junto con beneficios en vivienda, correspondiente al acceso a subsidios para vivienda.

Reparaciones simbólicas.

Expone que al igual que en todos los demás procesos de Justicia Transicional, parte importante de la reparación por los daños morales causados a los familiares de las víctimas de violaciones a los Derechos Humanos se realiza a través de actos positivos de reconocimiento y recuerdo de los hechos que dieron lugar a aquellas violaciones. Este tipo de acciones pretende reparar, ya no a través de un pago de dinero paliativo del dolor – siempre discutible en sus virtudes compensatorias– sino que precisamente tratando de entregar una satisfacción a esas víctimas que en parte logre reparar el dolor y la tristeza actual y con ello reducir el daño moral. En este sentido refiere una serie de reparaciones de carácter simbólico en las que ha incurrido el Estado (Memorial del Cementerio General, establecimiento del Día del Detenido Desaparecido, construcción del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, entre otros).

La identidad de causa entre lo que se pide en estos autos y las reparaciones realizadas.

De lo expresado anteriormente concluye que los esfuerzos del Estado por reparar a las víctimas de violaciones a los Derechos Humanos, no sólo han cumplido todos los estándares internacionales de Justicia Transicional, sino que han provisto indemnizaciones razonables con la realidad financiera del Estado que efectivamente han apuntado a compensar a las víctimas por



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: CVRHXFDNKXX

«RIT»

Foja: 1

los daños, tanto morales como patrimoniales, sufridos a consecuencia de las violaciones a los Derechos Humanos.

Así las cosas, tanto la indemnización demandada como el cúmulo de reparaciones hasta ahora indicadas pretenden compensar los mismos daños ocasionados por los mismos hechos. De esta forma, los ya referidos mecanismos de reparación han compensado precisamente aquellos daños no pudiendo, por ello, exigirse nuevas reparaciones. Cita jurisprudencia de nuestro Tribunales Superiores de Justicia en apoyo de su posición.

En segundo lugar opone excepción de prescripción extintiva.

En subsidio opone la prescripción de las acciones civiles de indemnización de perjuicios deducidas en este proceso civil con arreglo a lo dispuesto en el artículo 2332 del Código Civil, en relación con lo dispuesto en el artículo 2497 del mismo Código. Solicita que, por encontrarse prescritas éstas, se rechacen las acciones resarcitorias en todas sus partes.

Esgrime que conforme al relato efectuado por los demandantes, as detenciones, privaciones de libertad y torturas se produjeron en un lapso de tiempo que va entre noviembre de 1974 y octubre de 1975.

Razona expresando que incluso entendiendo suspendida la prescripción durante el período de la dictadura militar, iniciada en septiembre de 1973, por la imposibilidad de las propias víctimas de ejercer las acciones legales correspondientes ante los tribunales de justicia, hasta la restauración de la democracia, a la fecha de notificación de la demanda de autos, esto es, el 15 de junio de 2018, igualmente ha transcurrido en exceso el plazo de prescripción extintiva que establece el citado artículo 2.332 del Código Civil, por lo que opone la excepción de prescripción de 4 años establecida en la norma recién citada.

Señala que en subsidio de la excepción de prescripción recientemente referida, opone la excepción de prescripción extintiva de 5 años contemplada para las acciones y derechos en el artículo 2515, en relación con el artículo 2514, ambos del Código Civil, ya que entre la fecha en que se habría hecho exigible el derecho a indemnización y la fecha de



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: CVRHXFDNKXX

«RIT»

Foja: 1

notificación de la acción indemnizatoria, transcurrió con creces el plazo que establece el citado artículo 2515 del Código Civil.

Refiere finalmente sobre la alegación de los demandantes en cuanto a la imprescriptibilidad de la acción indemnizatoria de autos, indica que la imprescriptibilidad es excepcional y requiere siempre declaración explícita, la que en este caso no existe, no es factible, a su juicio, apartarse del claro mandato de la ley interna al resolver esta contienda y aplicar las normas contenidas en los artículos 2332 y 2497 del Código Civil. Cita variada jurisprudencia al respecto.

Contenido patrimonial de la acción indemnizatoria

Que en la especie se han ejercido acciones de contenido patrimonial que persigue hacer efectiva la responsabilidad extracontractual del Estado, por lo que no cabe sino aplicar, en materia de prescripción, las normas del Código Civil, lo que no contraría la naturaleza especial de la responsabilidad que se persigue, en atención a que las acciones impetradas pertenecen -como se ha dicho- al ámbito patrimonial.

Agrega que en base a normas contenidas en el Derecho Internacional, que no hay norma expresa de derecho internacional de los derechos humanos, debidamente incorporada a nuestro ordenamiento jurídico interno, que disponga la imprescriptibilidad de la obligación estatal de indemnizar

En cuanto al daño e indemnización reclamada.

Interpone en subsidio de las defensas y excepciones reproducidas anteriormente, las siguientes alegaciones respecto a la naturaleza de la indemnización solicitada y al excesivo monto pretendido.

Refiere que la indemnización del daño puramente moral no se determina cuantificando, en términos económicos, el valor de la pérdida o lesión experimentada, sino que sólo otorgando a la víctima una satisfacción, ayuda o auxilio que le permita atenuar el daño, morigerarlo o hacerlo más soportable, mediante una cantidad de dinero u otro medio, que en su monto o valor sea compatible con esa finalidad meramente satisfactiva.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: CVRHXFDNKXX

«RIT»

Foja: 1

Enfatiza en que tampoco resulta procedente acudir a la capacidad económica del demandante y/o del demandado como elemento para fijar la cuantía de la indemnización, y que el daño moral debe ser legalmente acreditado en el juicio con arreglo a la ley, por lo que la extensión de cada daño y el monto de la indemnización pretendida deberán ser justificadas íntegramente.

En subsidio de las excepciones precedentes de reparación y prescripción, la regulación del daño moral debe considerar los pagos ya recibidos del Estado y guardar armonía con los montos establecidos por los Tribunales.

Alega que en la fijación del daño moral por los hechos de autos, el tribunal debe considerar todos los beneficios extrapatrimoniales que los distintos cuerpos legales contemplan, pues su finalidad era precisamente reparar el daño moral, agregando que de no accederse a dicha petición subsidiaria, implicaría un doble pago por un mismo hecho, lo cual contraría los principios jurídicos básicos del derecho en orden a que no es jurídicamente procedente que un daño sea indemnizado dos veces.

Improcedencia del pago de reajustes e intereses.

Finaliza su contestación señalando que no procede el cobro de reajustes e intereses, en el caso de que la sentencia que se dicte en autos acoja la demanda y establezca esa obligación, solicitando que de ninguna manera podrían contabilizarse desde una fecha anterior a aquella en que la sentencia que los concede se encuentre firme o ejecutoriada.

En razón de lo expuesto previamente, pide tener por contestada la demanda y, en definitiva, conforme a las excepciones, defensas y alegaciones opuestas, rechazar dicha acción indemnizatoria en todas sus partes, con costas; o, en subsidio, rebajar sustancialmente el monto indemnizatorio pretendido.

Tercero: Que, en su escrito de réplica, la actora agrega los siguientes elementos.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: CVRHXFDNKXX

«RIT»

Foja: 1

Señala que el Consejo de Defensa del Estado en su escrito de contestación no niega la concurrencia de los hechos de tortura sufridos por su representada.

Sin perjuicio de ello, no es posible establecer que se ha reparado de manera íntegra el daño sufrido, toda vez que lo mencionado por este corresponde únicamente a un régimen de pensiones asistenciales, que no son incompatibles con una indemnización determinada por esta magistratura. Incluso, reiterada jurisprudencia ha fallado en este sentido.

Sobre la prescripción, menciona que la jurisprudencia de nuestros tribunales ha sostenido que la acción de indemnización, para el caso materia de autos, y por aplicación de normativa internacional de Derechos Humanos es de carácter imprescriptible, por lo que no le son aplicables las normas del Código Civil en la materia.

Cuarto: Que, en su escrito de dúplica, la demandada reitera las ideas dichas en su escrito de contestación.

Quinto: Que, a fin de acreditar sus dichos, la actora acompaña en tanto prueba instrumental los siguientes documentos.

- I. Informe Psicológico Evaluación de Daño Asociado a Violencia Política, emitido por el Programa de Reparación y Atención Integral en Salud y Derechos Humanos.
- II. Copia de Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura.
- III. Nómina de personas reconocidas como víctimas de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura.
- IV. Carpeta del Instituto Nacional de Derechos Humanos, respecto a don Juan Carlos Flores Sánchez.
- V. Certificado de nacimiento de don Juan Carlos Flores Sánchez.
- VI. Artículo titulado “Algunos Factores de Daño a la Salud Mental, elaborado por el Programa de Salud Mental de la Vicaría de la Solidaridad.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: CVRHXFDNKXX

- VII. Artículo titulado “Algunos problemas de salud mental detectados por equipo psicológico – psiquiátrico” del mes de julio del año 1978, elaborado por el programa de salud mental de la Vicaría de la Solidaridad.
- VIII. Artículo titulado “Tortura, tratos crueles e inhumanos en 1980. Su impacto psicológico” del mes de julio del año 1980, elaborado por el programa de salud mental de la Vicaría de la Solidaridad.
- IX. Artículo titulado “Trabajo Social, una experiencia solidaria en la promoción y defensa de los Derechos Humanos” del mes de Abril del año 1987, suscrito el departamento jurídico de la Vicaría de la Solidaridad.
- X. Artículo titulado “Salud Mental y violaciones a los Derechos Humanos” del mes de junio del año 1989, suscrito por equipo de salud de la Vicaría de la Solidaridad.

Sexto: Que, la demandada no acompaña diligencia probatoria alguna.

Séptimo: Que, atendido el mérito de los antecedentes que constan en autos, esto es lo expresado por ambas partes en la etapa de discusión y la prueba rendida, se tienen por acreditados lo siguientes hechos:

Que, don Juan Carlos Flores Sánchez fue detenido con fecha 17 de enero de mil novecientos setenta y cuatro, por personal de la Fuerza Aérea de Chile y del Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea.

Fue privado de libertad, y llevado a distintos centros en donde sufrió de torturas consistentes en golpes y aplicación de electricidad en distintas partes del cuerpo, recuperando su libertad con fecha 5 de julio de mil novecientos setenta y cuatro.

Asimismo, y de acuerdo al Informe de la Comisión de Prisión Política y Tortura Valech I, fue reconocido como víctima con el número 8744.



«RIT»

Foja: 1

I.- En cuanto a la excepción de reparación integral interpuesta por el Fisco.

Octavo: Que, las disposiciones legales invocadas por el Fisco, entre ellas las Leyes N° 19.123 ,19.992 y 20.874 como fundamento de su alegación en cuanto a que los perjuicios reclamados ya han sido reparados, denominadas también “Leyes de Reparación”, si bien corresponden a un reconocimiento del Estado de su deber de reparar el daño causado a las víctimas de violaciones a los Derechos Humanos y a sus familiares directos, en ningún sentido las reparaciones materiales y simbólicas en ellas contenidas, a juicio de esta sentenciadora, resultan incompatibles con una eventual indemnización de perjuicios, de considerarse que concurren los requisitos para ello.

A mayor abundamiento que de acuerdo al artículo 17 de la Ley N° 19.123, se establece una pensión mensual de reparación en beneficio de los familiares de las víctimas de violaciones a los Derechos Humanos o de la violencia política, que no contempla la limitación pretendida por la demandada, debiendo tenerse presente, a mayor abundamiento, que la propia ley, también conocida como Ley de Reparación, ha ido ampliando no sólo los beneficios otorgados sino también la calidad de beneficiarios a lo largo del tiempo.

En el mismo sentido, las reparaciones de carácter simbólico a las que hace referencia la demandada, no resultan en modo alguno incompatibles con una eventual indemnización de perjuicios -de considerarse que concurren los requisitos para ello-, más aún si la propia ley no establece dicha incompatibilidad para la reparación monetaria, de acuerdo al artículo 24 de la citada ley. De este modo, no siendo incompatible una reparación de carácter monetario con una indemnización de perjuicios, con mayor razón resulta compatible -a juicio de esta magistratura- con una reparación meramente simbólica.

Además, la indicada normativa y cuerpos legales en general citados tampoco establecen renuncia, prohibición o incompatibilidad alguna con una eventual reparación monetaria que tenga por objeto la reparación



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: CVRHXFDNKXX

«RIT»

Foja: 1

integral del daño padecido, razones todas ellas que en consecuencia llevan a esta magistratura a rechazar la alegada excepción de reparación.

II.- En cuanto a la excepción de prescripción opuesta por el Fisco.

Noveno: Que, de forma previa a entrar al fondo del asunto que ha sido sometido a conocimiento de esta magistratura, cabe pronunciarse sobre la excepción de prescripción interpuesta por el Fisco.

Décimo: Que, en este sentido cabe reiterar que la demandada alega la prescripción de la acción, de 4 años contemplada en el artículo 2332 del Código Civil y, en subsidio, de 5 años establecida en el artículo 2515 del mismo Cuerpo de leyes.

Luego y de acuerdo a lo debatido por las partes, procede dilucidar si corresponde o no considerar un estatuto de imprescriptibilidad integral aplicable no sólo al ámbito de la responsabilidad penal, sino también extensivo al ámbito civil de las indemnizaciones en materia de crímenes de lesa humanidad.

Undécimo: Que, al efecto, ha de señalarse que en la especie, no se trata de una acción de naturaleza meramente patrimonial, sino de una acción reparatoria en el ámbito de crímenes de lesa humanidad, que se rige por preceptos del Derecho Internacional que consagran la imprescriptibilidad. Ello, por cuanto la fuente de la obligación de reparación del Estado se funda no sólo en la Constitución Política de la República, sino también en los principios generales del Derecho Humanitario y los Tratados Internacionales, los que deben primar por sobre las codificaciones civilistas internas, la aplicación de la prescripción del Derecho Privado en este caso significaría una negación de Derechos Fundamentales, precisamente por quien es el obligado a resguardarlos.

Luego, por un principio de coherencia jurídica, la imprescriptibilidad debe regir tanto en el ámbito civil, cuanto en el ámbito penal, así, en diversos fallos de nuestro máximo Tribunal, se ha razonado que: “en el caso en análisis, dado el carácter de delitos de lesa humanidad de los ilícitos



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: CVRHXFDNKXX

«RIT»

Foja: 1

verificados,...si la acción penal persecutoria es imprescriptible, no resulta coherente entender que la acción civil indemnizatoria esté sujeta a las normas sobre prescripción establecidas en la ley civil interna” (Rol CS 3573-2012).

Todas estas reflexiones conducen en consecuencia al rechazo de la excepción de prescripción enarbolada por la demandada.

III. En cuanto a la pretensión indemnizatoria.

Duodécimo: Que, corresponde determinar si concurren los presupuestos que hacen procedente la indemnización de perjuicios reclamada y que conducen a establecer la responsabilidad del Estado en las detenciones, privaciones de libertad, torturas y actos violentos practicados a don Juan Carlos Flores Sánchez, al margen de todo proceso legal, por agentes del Estado, considerando la normativa aplicable.

Así, la Carta de las Naciones Unidas contiene entre sus propósitos y principios, el respeto a los Derechos Humanos y a las Libertades Fundamentales de todos, tema recurrente en sus objetivos y que ha sido reiterado en posteriores Tratados Internacionales.

Luego, tratándose en la especie de una violación a los derechos humanos debemos acudir también a la Convención Americana de Derechos Humanos, que en sus artículos 1.1 y 63.1 señala que cuando ha existido una violación a los derechos humanos surge para el Estado infractor la obligación de reparar con el pago de una justa indemnización a la parte lesionada.

De acuerdo con lo que dispone el inciso segundo del aludido precepto, los derechos humanos asegurados en un tratado se incorporan al ordenamiento jurídico interno, por lo cual ningún órgano del Estado puede desconocerlos. Dicha obligación también deriva de los Tratados Internacionales como el Convenio de Ginebra de 1949.

Décimo tercero: Que, establecida de forma manifiesta la responsabilidad del Estado, procede ahora determinar la existencia del daño que reclama el actor; así el daño moral tiene su fundamento en el



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: CVRHXFDNKXX

«RIT»

Foja: 1

sufrimiento, dolor o molestia que el hecho ilícito ocasiona en la sensibilidad física o en los sentimientos o afectos de una persona. Se toma el término dolor en un sentido amplio, comprensivo del miedo, la emoción, la vergüenza, la pena física o moral ocasionado por el hecho dañoso.

Décimo cuarto: Que, en orden a acreditar la existencia y evaluación del daño moral reclamado, la actora presentó el informe psicológico del Programa de Reparación y Atención Integral en Salud y Derechos Humanos.

En este, dentro de sus conclusiones, se establece que el demandante de autos ha visto afectada su relación con su familia a causa de los hechos cometidos en etapa de dictadura, con secuelas que se manifiestan en conductas de desorganización familiar, traumatización externa y trauma transgeneracional en el núcleo familiar.

Ahora bien, no obstante la prueba rendida y analizada precedentemente que resulta satisfactoria para acreditar el daño moral alegado, la existencia de dicho daño moral en este caso incluso pudo presumirse atendida la gravedad del hecho ilícito, sus consecuencias y las circunstancias que lo rodearon.

Décimo quinto: Que, en la determinación del quantum de la indemnización, cabe señalar que en la especie se configura el daño moral padecido por la demandante por los motivos expresados en el considerando anterior, razón por la que pese a lo complejo de calcular y cuantificar este tipo de daño, esta Juez lo regula prudencialmente en la cantidad de \$ 50.000.000. (cincuenta millones de pesos).

Décimo sexto: Que, al haberse determinado en esta sentencia la indemnización que debe satisfacer la demandada, la suma regulada se reajustará conforme la variación del Índice de Precios al Consumidor entre la fecha de esta sentencia y el mes que preceda al pago y con intereses desde que la misma quede ejecutoriada.

Décimo séptimo: Que, atendido lo dispuesto por el artículo 144 del Código de Procedimiento Civil, no habiendo resultado totalmente vencida y



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: CVRHXFDNKXX

«RIT»

Foja: 1

estimando esta magistratura que la demandada ha litigado con motivo plausible, se le eximirá del pago de las costas de la causa.

Por estas consideraciones y, de conformidad, con lo que establecen los artículos 47 y siguientes, 222 , 224, 236, 1437, 1700, 1706, 2492 y 2518 del Código Civil; artículos 144, 160, 170, 342, 346, 426, 427 y 428 del Código Civil; Constitución Política de la República; Convención Americana de Derecho Humanos; Convenio de Ginebra de 1949, se resuelve que:

I.- Se rechazan las excepciones de reparación y de prescripción deducidas por el demandado.

II.- Se acoge, parcialmente, la demanda deducida a lo principal del escrito de fecha 29 de julio de dos mil veintidós y, en consecuencia, se condena al Fisco de Chile a pagar a título de daño moral, la suma total de \$ 50.000.000 (cincuenta millones de pesos) a favor de don Juan Carlos Flores Sánchez

III.- Que se exime del pago de las costas a la demandada.

Regístrese, notifíquese y en su oportunidad, archívese.

Rol N° C-7652-2022.

Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art. 162 del C.P.C. en **Santiago, veintiocho de Abril de dos mil veintitrés.**



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: CVRHXFDNKXX